EFE

Federico Lipperheide, hermano del industrial secuestrado, se personó ayer en la casa de éste para interesarse por los detalles del hecho.

La acción parece motivada por la negativa de los empresarios a pagar el "impuesto revolucionario"

La familia del industrial vasco no ha recibido comunicación directa de ETA Militar

Viene de **primera página**

La familia del secuestrado manifestó en la tarde de ayer que en su domicilio no se habían recibido comunicaciones de los secuestradores sobre el estado de aquél ni las condiciones de su posible rescate, aunque todo parece indicar que la organización terrorista exija una fuerte suma de dinero para recoger fondos, ya que sus finanzas están ahora debilitadas ante la negativa de los empresarios a pagar el denominado impuesto revolucionario.

Cuando en las horas siguientes al secuestro se especulaba sobre la autoría del mismo, al valorar las razones que tendría ETA para llevar a cabo esta acción, se coincidía en la eventual necesidad de la organización de reforzar sus finanzas, que se habrían visto mermadas por la creciente negativa de empresarios y particulares a satisfacer el denominado impuesto revolucionario que se les exigía. Se consideró, pues, desde el primer momento que el secuestro serviría al mismo tiempo para amedrentar a aquéllos y contrarrestar así las campañas que al respecto han realizado en los últimos tiempos tanto el PNV como el Gobierno vasco.

En este sentido, un portavoz del Ejecutivo vasco manifestaba ayer a EL PAIS su temor «de que el miedo vuelva a los receptores de la carta exigiendo el impuesto revolucionario y vuelvan a repetirse otra vez los viajes continuos a Hendaya».

Con respecto a este tema, el industrial Luis Olarra hizo ayer unas duras declaraciones, en las que, entre otras cosas, decía: «Hemos llegado a lo más inhumano y degradante para una sociedad civilizada, como es el chantaje. La mayor barbaridad que ahora puede hacerse, y espero que nadie lo haga, es aceptar la extorsión en masa. que con este secuestro se pretende, a través del llamado impuesto revolucionario, que muchos habían dejado de pagar. Pero quienes les han aconsejado que así lo hicieran se hacen ahora los sordos, porque son incapaces de afrontar nada en serio. Sólo apelando al sentido de la responsabilidad de todos y cada uno, negándose a los intentos de romper la sociedad, pueden pervivir los pueblo. Los empresarios», añadía Olarra, «aceptan el grado de responsabilidad que les corresponde en el solidario quehacer constructivo, y esperan ser correspondidos por quienes deben dar ejemplo en los momentos difíciles».

No hay desbandada de financieros

Sin embargo, el industrial vizcaíno consideraba «un exceso» una información de una agencia estatal, que afirmaba ayer que a raíz del secuestro de José Lipperheide se habría producido una desbandada de familias residentes en el barrio de Neguri para autoprotegerse en relación con nuevas acciones de ETAm y para impedir ser extorsionadas por medio del denominado impuesto revolucionario.

«No me consta», declaró Olarra a EL PAIS, «tal desbandada ni yo he tenido ninguna noticia sobre nada anormal en este sentido, y yo vivo en Neguri. Lo que sí puede existir es una cierta alarma tras el secuestro de Lipperheide, tras un período en el que la gente del empresariado pensaba, confiada, que el tema del impuesto revolucionario estaba controlado, ya que cada vez se pagaba menos. Se había creado un cierto clima de tranquilidad que ahora se ha roto».

El propio gobernador civil de Vizcaya consideraba como excesivamente alarmante y exagerada la mencionada información e indicaba que «no nos consta que tal desbandada de empresarios se haya producido». Manifestó también a EL PAIS que, tras el secuestro de Lipperheide no se han producido por parte de familias de Neguri ni de empresarios peticiones especiales de protección. Por su parte, un portavoz del Gobierno vasco calificaba dicha información como «alarmista» y un ejemplo de «terrorismo informativo».

El recuerdo de Javier Ibarra

En círculos políticos y empresariales vascos el secuestro de José Lipperheide trae a la memoria, por sus muchas coincidencias, el que sufriera Javier Ibarra. En estos círculos se considera que, como en aquella ocasión, el secuestro, más que dirigido contra el propio José Lipperheide, tiene como objetivo la familia Lipperheide, dado que en la misma hay miembros influyentes, como su hermano Federico, que participa también en los negocios familiares, y el hijo de este último, que es vicepresidente del Banco de Vizcaya. En este sentido, se recuerda que cuando un comando «berezi» de ETA-pm —que luego se integró en ETAm— secuestró a Javier Ibarra, la impresión que se tuvo desde el primer momento era de que el rescate por su liberación se pedía más a las diversas ramas de la familia Ibarra que a sus propios hijos.

Sin embargo, distintas fuentes financieras y empresariales consultadas por EL PAIS han indicado que la mayor parte de los negocios que controlan o en los que participan los distintos miembros de la familia Lipperheide —la mayor parte pequeñas y medianas empresas— no pasan precisamente en la actualidad por su mejor momento, e incluso algunos de ellos conocen serias dificultades económicas.